



Intervención en el Primer Comité de la Asamblea General

Debate General

Maritza Chan, Ministro Consejero

70^a Asamblea General de la ONU, Nueva York, 12 de octubre, 2015

Statement at the First Committee of the General Assembly

General Debate

Maritza Chan, Minister Counselor

70th session of the UN General Assembly, New York, 12 October, 2015

Cotejar con la alocución – Check against delivery

Señor Presidente,

Permítame felicitar a usted y los demás distinguidos miembros del Bureau por su elección para dirigir los trabajos de la Primera Comisión.

A la vez, agradecemos al Embajador Courtenay Rattray, Representante Permanente de Jamaica y a su distinguido equipo, por el trabajo realizado durante el anterior período de sesiones.

Costa Rica se adhiere a la intervención del distinguido representante del Ecuador en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.

Señor Presidente,

Al realizar un balance sobre los más importantes logros y retos que enfrenta la comunidad internacional en materia de desarme nuclear, no proliferación y control de armamentos en el presente período, el resultado es mixto.

Por un lado, en diciembre del 2014 logramos que el Tratado sobre el Comercio de Armas entrara en vigor en tan sólo 18 meses y, a finales de agosto, celebramos en Cancún, México, su Primera Conferencia de Estados Parte.

A pesar de que contamos con primer Tratado Internacional que establece obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados, a fin de garantizar controles responsables y eficaces para las transferencias internacionales de armas convencionales, sus municiones, piezas y componentes, la situación en el terreno dista mucho de ser la que esperábamos con su entrada en vigor.

Observamos todavía muchos y muy serios actos que violan el objetivo del Tratado sobre el Comercio de Armas; violaciones que lamentablemente experimenta en carne propia la población civil en Medio Oriente y África, cuyo sufrimiento el ATT debía evitar.

El Tratado sobre el Comercio de Armas fue elaborado para asegurar que las exportaciones de armas convencionales no aticen los conflictos, burlen los embargos del Consejo de Seguridad, faciliten el terrorismo o graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Las prohibiciones expresas del Tratado no son sugerencias. Son obligaciones.

Por ello, las transferencias irresponsables a las zonas en conflicto deben detenerse y deben detenerse ya. En este sentido, Costa Rica llama a los principales Estados exportadores e importadores de armas convencionales a que firmen y ratifiquen el Tratado sobre el Comercio de Armas sin mayor dilación.

Para quienes ya somos Estados Parte, debemos intensificar los esfuerzos para su aplicación plena y efectiva. Los Estados que no producimos ni exportamos armas, como Costa Rica, trabajamos en establecer las estructuras, procedimientos y capacidades que exige el Tratado para cumplir a cabalidad con sus obligaciones y fomentar, al mismo tiempo, la cooperación y asistencia internacional. Costa Rica recibe en estos momentos cooperación de BAFA-Unión Europea con el objetivo de convertirnos en modelo de implementación en Centroamérica y proporcionar posteriormente cooperación Sur-Sur.

Señor Presidente,

Costa Rica expresa su consternación por la alta tasa de víctimas civiles en hostilidades internas o internacionales. Si bien la población civil fue víctima de daños colaterales en el pasado, lo es hoy por ataques directos de los combatientes y, en muchos casos, sus hogares, escuelas, hospitales, bienes y producción, se han convertido deliberadamente en objetivos militares.

El undécimo informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (S/2015/453), publicado el pasado 15 de junio, nos relata un panorama desgarrador alrededor del mundo. De los 17 conflictos analizados por el reporte del Secretario General, sólo dos traspasan fronteras. A esto, sumemos los datos de la organización no gubernamental "*Action on Armed Violence*," que estima en casi 150 mil los muertos y heridos por el uso de armas explosivas en zonas pobladas entre 2011 y 2014. De esta cifra, el 78% son civiles.

Toda la alta sofisticación tecnológica de las capacidades militares y de seguridad de los países no ha logrado evitar que día a día la población civil, y de ella, los sectores más vulnerables, continúe siendo la principal receptora del impacto de la violencia directa derivada del uso de la fuerza.

Por esta razón, Costa Rica repudia y condena el uso de armas explosivas en zonas pobladas, como lo hemos visto en las situaciones en Afganistán, Iraq, Siria, Pakistán y Gaza. Costa Rica llama a los Estados a desarrollar normas más estrictas y compromisos para prohibir y restringir su uso, no solo para poner fin a las atroces violaciones del derecho internacional humanitario, sino porque reducir drásticamente el daño a los civiles, es fundamental para reducir los incentivos de las poblaciones locales a tomar las armas y unirse a causas extremistas. Mi

delegación, apoya la recomendación del Secretario General para que las partes en conflicto restrinjan el uso en zonas pobladas de explosivos con efectos de amplio rango, y reconocemos que tal uso es un problema humanitario que debe ser atendido.

Costa Rica también expresa su preocupación por el reciente empleo de municiones en racimo en diversas partes del mundo. Lo hemos visto en Libia, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. Costa Rica condena todo uso de las municiones en racimo por cualquier actor, pues estas acciones van en contra del espíritu, objeto y letra de la Convención sobre Municiones en Racimo y solo intensifican el sufrimiento humano, así como las emergencias humanitarias. Por ello, reiteramos la importancia de que todos los Estados se adhieran a la Convención e implementen el Plan de Acción de Dubronik.

También nos preocupa, señor Presidente, el uso de drones armados para llevar a cabo asesinatos selectivos fuera de zonas de conflicto armado. Las capacidades ofrecidas por drones están llevando a los gobiernos a reinterpretar los derechos humanos internacionales fundamentales y los principios humanitarios destinados a la defensa del derecho a la vida y a la protección de los civiles de los efectos del conflicto armado.

Además, el uso de drones armados está contribuyendo a deshumanizar el conflicto armado, reducir del umbral para el uso de la fuerza y ha sembrado el terror en los lugares en los que se utilizan. Para mi país, es urgente que tomemos acciones para comprender mejor este tema y abordar sus implicaciones, así como para aumentar la transparencia y garantizar la rendición de cuentas. Las Naciones Unidas deben desempeñar un papel de liderazgo en la adopción de tales medidas, especialmente a través de la labor de sus órganos de desarme.

En cuanto a las armas químicas, mi delegación celebra la reciente adopción de la resolución 2235 (2015) del Consejo de Seguridad, que establece el Mecanismo Conjunto de Investigación de las Naciones Unidas y la OPAQ, para esclarecer las denuncias sobre el uso de gas cloro contra la población civil con miras a identificar a las personas, entidades, grupos o gobiernos que hayan empleado sustancias químicas como armas en Siria o que hayan organizado o patrocinado su empleo participando en él de cualquier otro modo. Este es un paso en la dirección correcta a fin de proteger a los civiles y evitar la impunidad.

Señor Presidente,

Costa Rica lamenta que la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2015 no haya logrado adoptar su documento final. Si el compromiso hubiese sido de todos, la Conferencia de Examen debió constituir un verdadero punto de inflexión, una oportunidad dorada para otorgarle un nuevo ímpetu al desarme nuclear.

Sin embargo, como expresáramos en esa ocasión, la Promesa Humanitaria es el resultado tangible de la Conferencia de Examen. Costa Rica le da la bienvenida y al reconocimiento de que existe –en efecto– un vacío legal en torno a las armas nucleares. Costa Rica celebra que 119 Estados se han adherido a la Promesa Humanitaria y llama a más Estados a unir esfuerzos para llenar ese vacío legal, al perseguir medidas que estigmatizarán, prohibirán y conducirán a la eliminación de todas las armas nucleares.

Para Costa Rica, es claro que no podemos seguir dejando la tarea del desarme nuclear exclusivamente en las manos de los Estados poseedores, pues éstos han demostrado que no están interesados en perderlas. Las naciones más interesadas en establecer las proscripciones somos y seguiremos siendo aquellas que no las tenemos y que podemos en cualquier momento ser víctimas de sus indiscriminados efectos.

Hemos logrado la prohibición de las armas biológicas y químicas y podemos hacer lo mismo con las armas nucleares, porque su empleo es también contrario al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Es hora de buscar resultados. Cuente con Costa Rica para alcanzar esa meta.

Señor Presidente,

Costa Rica es un país pequeño, democrático, desarmado y civilista. El sistema multilateral y el derecho internacional son nuestros únicos instrumentos de defensa. Sabemos bien que la paz y la seguridad como “bien público global” se alcanza -en parte- honrando la Carta de las Naciones Unidas, en especial, sus artículos 10 y 26, cuyo cumplimiento Costa Rica ha abogado por décadas. Sin embargo, la paz y la seguridad requieren más que el control de los armamentos, sino que también exigen atender el cambio climático, reducir la inequidad y eliminar la pobreza. Esos son los verdaderos enemigos de los Estados.

Tras la adopción de la Agenda de Desarrollo 2030, creemos que las principales herramientas para promover y afianzar la seguridad nacional e internacional y alcanzar la meta 16, son el fortalecimiento y perfeccionamiento de la democracia, y la promoción y respeto del Estado de Derecho.

Aunque somos una nación desmilitarizada, no desconocemos las legítimas preocupaciones de seguridad y defensa que pueden albergar otros países, ni la necesidad para muchos de ellos de incurrir en gastos militares que resulten justificables a la luz de criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Lo que Costa Rica cuestiona es el gasto militar excesivo, que se convierte en barrera para el desarrollo y motor para el conflicto. Por eso, cuando comparamos la inversión anual en armas nucleares, que se estima en \$105 mil millones, con el presupuesto anual de la Oficina de Asuntos de Desarme que es de aproximadamente \$12 millones, es muy claro cuáles son las prioridades después de 45 años de la entrada en vigor del TNP.

Por ello, Costa Rica continuará insistiendo en la necesidad de evolucionar de doctrinas de seguridad añejas, basadas en paradigmas estrictamente militares, a aquellas que descansan, esencialmente, en paradigmas de desarrollo sostenible y seguridad humana.

Queda mucho por hacer, y nos corresponde a los Estados Miembros sumar voluntades e iniciativas que echen a andar la maquinaria multilateral de desarme, así como aquellas iniciativas que nos permitan responder a los desafíos que enfrenta la comunidad internacional y, en especial, la población civil.

Reiteramos nuestra confianza en el sistema multilateral, nuestro apego contundente al derecho internacional y nuestro compromiso para avanzar en esos objetivos.

Muchas gracias.

Mr. President,

First, allow me to congratulate you and the other distinguished members of the Bureau on your election to conduct the work of the First Committee.

We would also like to thank Ambassador Courtenay Rattray, Permanent Representative of Jamaica, and his distinguished team for the work they carried out during the previous session.

Costa Rica aligns itself to the statement made by the distinguished representative of Ecuador, on behalf of the Community of Latin America and Caribbean States, CELAC.

Mr. President,

Taking stock of the most important achievements and challenges faced by the international community with respect to nuclear disarmament, non-proliferation and arms control in the current session, the results are mixed.

On one hand, the Arms Trade Treaty entered into force in record time in December of 2014. And, at the end of August, we held its first Conference of States Parties in Cancun, Mexico.

Despite having the first international Treaty establishing legally binding obligations for the States in order to guarantee responsible and efficient control of international transfers of conventional weapons, ammunition, parts or components, the situation on the ground is far from what we had hoped for with its entry into force.

We are still seeing too many serious acts that violate the objective of the Arms Trade Treaty. These violations are experienced firsthand by the civilian population in the Middle East and Africa—the very people whose suffering the ATT should prevent.

The Arms Trade Treaty was developed to ensure that conventional weapons transfers do not fuel conflict, circumvent Security Council embargoes, facilitate terrorism or commit serious violations to human rights or international humanitarian law. The express prohibitions of the Treaty are not suggestions. They are obligations.

Thus, irresponsible transfers to conflict zones should be stopped, and should be stopped immediately. In this regard, Costa Rica calls on the main exporters and importers of conventional weapons to sign and ratify the Arms Trade Treaty without further delay.

For those of us that are already States Parties, we should intensify efforts towards its full and effective application. Non-arms-producing States, such as Costa Rica, are working to establish the structures, procedures and capacities required by the Treaty to fully comply with its obligations; while also strengthening international cooperation and assistance. To this end, Costa Rica is currently receiving cooperation from the BAFA-EU Project. It is our aim to serve as a model of implementation in Central America, and facilitate in the near future South-South cooperation.

Mr. President,

Costa Rica is dismayed at the high rate of civilian casualties resulting from both internal and international hostilities. While the civilian population was the victim of collateral damage in the

past, today it is the object of direct attacks and, in many cases, hospitals, civilian homes, schools, belongings and productive activities have been deliberately targeted.

The eleventh report from the Secretary General regarding the protection of civilians in armed conflicts (S/2015/453), published on June 15, recounts a heartbreaking landscape around the world. Of the 17 conflicts analyzed by the report, only two cross borders. To this we add the data supplied by the NGO Action on Armed Violence, which estimates that nearly 150 thousand people have been killed or injured by explosive weapons in populated areas between 2011 and 2014. Of these, 78% were civilians.

Despite the high technological sophistication of military and security capabilities, civilians—particularly the most vulnerable sectors—continue to be the main recipients of direct violence that stems from the use of force.

For this reason, Costa Rica rejects and condemns the use of explosive weapons in populated areas, as we have seen in Afghanistan, Iraq, Syria, Pakistan and Gaza. Costa Rica calls upon all States to develop stricter standards and commitments to prohibit and restrict their use, not only as a means to end egregious violations of international humanitarian law, but because drastically reducing harm to civilians is fundamental to reducing the incentives of local populations to take up arms and join extremist causes. My delegation endorses the Secretary General's recommendation that parties to conflict should refrain from the use in populated areas of explosive weapons with wide-area effect and we recognize that such use is a humanitarian problem that must be addressed.

Costa Rica also expresses its concern for the recent employment of cluster munitions in various parts of the world. We have seen this in Libya, South Sudan, Syria, the Ukraine and Yemen. Costa Rica condemns all use of cluster munitions by any party, as these actions are contrary to the spirit, objective and purpose of the Convention on Cluster Munitions, and only intensify human suffering and humanitarian emergencies. Thus, we reiterate the importance that all States should adhere to the Convention and implement the Dubrovnik Action Plan.

We are also concerned, Mr. President, with the use of armed drones to carry out targeted killings outside of armed conflict zones. The capacities provided by drones are leading governments to reinterpret fundamental international human rights and humanitarian principles that defend the right to life and protect civilians from the effects of armed conflict.

In addition, the use of armed drones is contributing to the dehumanization of armed conflict, reducing the threshold for the use of force, and seeding terror in the areas where they are used. For my country, it is urgent that we take action to better understand this subject and address its implications, as well as increase transparency and guarantee accountability. The United Nations should be a leader in the adoption of these measures, particularly through the work of its disarmament bodies.

With regard to chemical weapons, my delegation applauds the Security Council's recent adoption of resolution 2235 (2015), which establishes the United Nations Joint Investigative Mechanism and the OPCW to clarify allegations regarding the use of chlorine gas against the civilian population, in order to identify the people, entities, groups or governments that have used chemical substances as weapons in Syria, or that have participated by organizing or

funding their use in any manner. This is a step in the right direction in terms of protecting civilians and preventing impunity.

Mr. President,

Costa Rica regrets that the 2015 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) was unable to adopt its outcome document. Had the commitment been made by all, the Review Conference would have been a true turning point—a golden opportunity to give new impetus to nuclear disarmament.

Nevertheless, as we expressed on that occasion, the Humanitarian Pledge is a tangible result of the Review Conference. Costa Rica welcomes the recognition that there is, in fact, a legal gap surrounding nuclear weapons. We celebrate the fact that 119 States have endorsed the Humanitarian Pledge, and call on more States to unite forces to fill this legal gap in pursuing measures that stigmatize, prohibit and lead to the elimination of all nuclear weapons.

For Costa Rica, it is clear that we cannot continue to leave the task of disarmament exclusively in the hands of nuclear-weapon States, as they have demonstrated that they are not interested in relinquishing them. The nations most interested in establishing bans on these weapons are, and will always be, those without weapons, those who at any time can be victims of their indiscriminate effects.

We have already achieved the prohibition of biological and chemical weapons, and we can do the same with nuclear arms, as their use would even more obviously contradict international and international humanitarian law. It is time to seek results. You can count on Costa Rica to achieve this goal.

Mr. President,

Costa Rica is a small, democratic, unarmed and civil country. The multilateral system and international law are our only instruments of defense. We well know that peace and security as a “global public good” is attainable—in part—by honoring the United Nations Charter, particularly Articles 10 and 26, the fulfillment of which Costa Rica has advocated for decades. Nevertheless, peace and security requires more than the control of weapons; it is also about addressing climate change, reducing inequality and eliminating poverty; these crises are the real enemies of States.

Following the adoption of the 2030 Development Agenda, we believe that the principal tools for promoting and consolidating national and international security and achieving goal 16 are strengthening and perfecting democracy, and promoting and respecting the rule of law.

Though we are a demilitarized nation, we are not strangers to the legitimate concerns regarding security and defense that other countries may harbor, nor the need for many of them to incur military expenses that are justifiable in the light of proportionality and reasonability. What Costa Rica questions, is excessive military spending that becomes a barrier to development and a driver of conflict. For example, when we compare the annual expenditure on nuclear weapons, which is estimated at \$US 105 billion, to the UN Office for Disarmament’s annual budget of only \$12 million, it is very clear where the priorities lay after 45 years of the NPT.

For this reason, Costa Rica will continue to insist on the need to move beyond stale security doctrines that are based on strictly military and deterrence paradigms, to those that rest, essentially, in paradigms of sustainable development and human security.

There is much left to do, and it is up to the Member States to unite efforts and initiatives that set to motion the multilateral disarmament machine, as well as those initiatives that will allow us to respond to the challenges faced by the international community and, in particular, the civilian population.

We reiterate our confidence in the multilateral system, our unwavering adherence to international law, and our commitment to advancing in these objectives.

I thank you.